

Jalisco: el único estado naranja del país

David Gómez-Álvarez*

Jalisco es el único estado gobernado por un partido político diferente al resto de los estados de la República. A diferencia de las otras 31 entidades federativas, incluida la Ciudad de México, que son gobernadas ya sea por alguno de los partidos tradicionales —PAN, PRI o PRD— o bien el partido emergente —Morena— Jalisco es el único estado que es gobernado por Movimiento Ciudadano, un partido más regional que nacional, que se asume de centro izquierda pero que se coaliga con el centro derecha. Esta condición política única hace del estado de Jalisco no sólo un caso distinto a todos los demás, sino obligado de entender en la reconfiguración política regional del país. En términos de su colorimetría política, Jalisco es el único estado naranja (el color que identifica a Movimiento Ciudadano).

Para entender por qué gobierna hoy Movimiento Ciudadano en Jalisco hay que remontarse 30 años atrás, a la época en que gobernaba el PRI como en todos los estados de la República sin excepción. Tras la polémica elección presidencial de 1988, Jalisco fue uno de los estados donde claramente ganó el candidato opositor del PAN, Manuel Clouthier. Incluso desde mucho antes, el PAN había ganado distintas elecciones locales que no le habían sido reconocidas, pero que indicaban un cambio político inminente en la región del Bajío que comprende parte de los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Esta región, que se ha

caracterizado por su oposición al régimen surgido de la Revolución mexicana, tiene sus orígenes históricos en el sinarquismo político y la guerra de los Cristeros.

Fue hasta la elección de 1994 cuando el PAN arrasó en las elecciones, convirtiéndose en el partido dominante en Jalisco hasta 2009, cuando perdió Guadalajara frente al PRI. Y es que para 2012 el desgaste del PAN era tal que cayó al tercer sitio, dando lugar al surgimiento de Movimiento Ciudadano como la nueva alternativa política frente al PRI. Apenas tres años después, en la elección intermedia de 2015, el también llamado partido naranja ganó la mayoría en el Congreso local, desplazando al PRI como primera fuerza política. Así, Movimiento Ciudadano ocupó la posición dominante que había ocupado el PAN por tres lustros gracias a que muchos electores y militantes panistas se mudaron a Movimiento Ciudadano, que terminó arrebatándole sus banderas políticas al PAN. En una frase, MC sustituyó al PAN en Jalisco.

Como se esperaba, Movimiento Ciudadano ganó en las elecciones locales de 2018. Tanto en la elección para gobernador como para el Congreso, el partido naranja logró consolidarse como primera fuerza política en Jalisco. Incluso, ganó todas las alcaldías metropolitanas, con lo cual MC ocupa las principales posiciones de elección popular en el Estado. Sin embargo, la sorpresa fue la irrupción local del partido Morena, que quedó en segundo lugar por encima del PRI y PAN. El efecto arrastre de la elección presidencial fue determinante en el resultado de las elecciones locales. Si bien Morena no logró ganar ninguna diputación local de mayoría relativa, por la vía plurinominal se convirtió en la segunda fuerza

política del Congreso. Morena tampoco logró ganar ninguna ciudad media o alcaldía metropolitana, pero obtuvo regidores en todas los ayuntamientos donde tuvo candidatos.

El resultado más relevante de la elección de 2018 fue el triunfo de López Obrador en la elección presidencial a nivel estatal. Como en todos los estados del país, excepto Guanajuato, el candidato de Morena ganó en Jalisco por encima del candidato del Frente por México, Ricardo Anaya. El efecto arrastre de la elección presidencial le permitió a Morena obtener el segundo lugar en la elección al Senado, logrando un escaño en la Cámara Alta y varios diputados federales por la vía plurinominal.

La elección al Senado merece un análisis más profundo, pues fue la elección más competida del 2018. No sólo porque MC logró triunfar a pesar del efecto arrastre de López Obrador, sino porque el candidato independiente Pedro Kumamoto no logró un escaño. En efecto, la elección senatorial fue la más competida de todas, acaso la única donde el resultado no se sabía de antemano. De acuerdo a los resultados electorales, quien obtuvo más votos individualmente fue Pedro Kumamoto con 598,424 votos, seguido de Antonia Cárdenas con 542,269 votos y en tercer sitio Clemente Castañeda de MC con 500,525. Gracias a las alianzas entre partidos políticos, MC ganó primer lugar sumando los votos del PAN, Morena en segundo lugar con el PT y Encuentro Social, y Kumamoto cayó al tercero, lo cual le impidió obtener un escaño en el Senado.

El triunfo del candidato de MC al gobierno del estado, Enrique Alfaro, fue mucho menor de lo esperado. Fue una victoria con sabor a derrota, pues inició la campaña con más

de 50 puntos de intención del voto y obtuvo 37 por ciento de la votación. A pesar de que MC ganó casi en todas las elecciones, lo hizo por un margen menor al esperado.

El ascenso electoral de Morena no se explica sin la debacle del PRI. De ser el partido en el gobierno, se convirtió en un partido marginal con apenas dos diputados locales. El desgaste no solo de la imagen del presidente Peña Nieto, sino de la marca PRI, fue tal que pasaron del primer lugar en 2012 al cuarto lugar seis años después, casi empatados con el Partido Verde y el PRD, ambos también con dos diputados locales cada uno. El resultado electoral de 2018 ha sido el peor en la larga historia del PRI Jalisco, que sigue inmerso en una crisis de identidad que se agrava con las renunciaciones de militantes que se pasan a MC pero sobre todo a Morena. En una frase, Morena sustituyó al PRI al igual que MC suplió al PAN.

Desde inicios de los noventa, en Jalisco existió un claro bipartidismo entre el PAN y el PRI que, tras la elección de 2018, se transformó en un nuevo bipartidismo ahora conformado por MC y Morena. Los partidos tradicionalmente grandes como el PAN y el PRI se han achicado al tamaño de los partidos pequeños como el PVEM y el PRD, con el riesgo de que desaparezcan en lo local. A pesar del cambio de siglas, el bipartidismo en Jalisco tiene el mismo vector: por un lado, grupos políticos de centro derecha (hoy representadas por MC y sus aliados) y, por el otro, corrientes políticas de centro izquierda (hoy aglutinadas en torno a Morena y el liderazgo del Presidente).

La relación entre Poderes siempre ha sido tensa, pero simulada. Sin estridencia, pero con un incuestionable control, los jefes políticos locales en México históricamente han sido los gobernadores. Como sucede en todas las entidades federativas, el Poder Ejecutivo

predomina entre los Poderes Públicos. Jalisco no es la excepción, aunque en el caso del Poder Legislativo la relación ha ido cambiando desde que se produjo el primer gobierno dividido (cuando el partido político del gobernador no obtuvo mayoría en el Congreso local) en 1997. A partir de entonces, todos los gobernadores han perdido la mayoría parlamentaria en la segunda mitad de su sexenio, lo cual ha impedido al Poder Ejecutivo mantener siempre subordinado al Poder Legislativo.

No obstante que el Legislativo local ha tenido mayorías distintas al partido del gobernador, su desarrollo institucional no se ha correspondido a su independencia política. A su interior, diputados y bancadas han abusado de los recursos legislativos hasta llevarlo a un nivel de descrédito en 2008 con el estallido de una serie de escándalos de corrupción que aún no se han podido esclarecer ni superar. Desde hace una década, el Congreso local ha intentado, legislatura tras legislatura, sanear la nómina y las finanzas del Poder Legislativo sin terminar de lograrlo. No ha logrado ser un contrapeso real al Poder Ejecutivo en términos de política y de fiscalización. Tampoco es un espacio de representación legítima, pues según diversos estudios y encuestas la mayoría de los ciudadanos no se sienten identificados ni representados por sus diputados. Acaso la única función que han desempeñado de forma limitada es legislar, pues muchas de las iniciativas provienen del propio.

La relación de sumisión del Poder Judicial respecto del Ejecutivo ha sido más acentuada. Históricamente, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado eran propuestos por el gobernador, aunque eso cambió a partir de que los partidos políticos intervinieron en su designación. La partidización de la integración del Poder Judicial no sólo

llevó a que todos los integrantes respondieran a un grupo o partido político, sino que fueran nombrados perfiles sin capacidad ni trayectoria. La degradación paulatina del Poder Judicial a partir de magistrados, jueces y secretarios que fueron ingresando de forma simulada sin cumplir los requisitos tocó fondo cuando trascendió que el mismo presidente del Poder Judicial tenía antecedentes penales. En 2015 el también presidente del Consejo de la Judicatura tuvo que renunciar en medio de un escándalo de corrupción y nepotismo que involucraba al propio gobernador.

Desde entonces, se ha intentado modificar la forma de designar a magistrados y jueces sin éxito. La resistencia al cambio dentro del Poder Judicial ha impedido su apertura y modernización. Muchos de sus integrantes se han opuesto a dichos cambios mediante amparos y recursos legales, que en muchos casos les han sido concedidos, frenando o incluso interrumpiendo cambios institucionales acordados. El gobernador del estado Enrique Alfaro envió una iniciativa de reforma al Poder Judicial que recientemente fue aprobada en el Congreso local. La reforma modificó el procedimiento de designación de los magistrados al incorporar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. También incluyó pruebas de control de confianza entre otros mecanismos que permiten abrir un proceso que había sido opaco y discrecional. De prosperar la reforma, pues varios magistrados y afectados han anunciado amparos, implicaría un cambio significativo en el Poder Judicial local.

Sin considerar la Ciudad de México, donde se concentra la inmensa mayoría de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs), Jalisco es acaso una de las entidades con más

capital social, particularmente concentrado en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Paradójicamente, cuando los medios de comunicación mencionan a la sociedad civil no hacen referencia a las OSCs del estado sino a las asociaciones empresarias (como Coparmex Jalisco, Cámara de Comercio de Guadalajara o el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco) que son organizaciones con más peso político que las propias organizaciones ciudadanas.

Como parte de la sociedad civil también están las universidades privadas, particularmente el ITESO, que tiene un reconocimiento público como institución crítica del gobierno. Llama la atención que la Universidad de Guadalajara no sea reconocida como una voz autorizada por las propias OSCs debido a que el grupo político que controla la máxima casa de estudios es considerado como un jugador de la política local, más que de la sociedad civil. Sin embargo, de forma individual muchos académicos de todas las universidades, públicas y privadas, participan en colectivos ciudadanos. Las organizaciones consideradas propiamente como ciudadanos, en realidad son pocas y se repiten en muchas iniciativas. En Jalisco, como en el resto de los estados, no existe una cultura y tradición filantrópica que permita que este tipo de organizaciones subsistan. Excepto por unas pocas organizaciones consolidadas, la mayoría apenas sobreviven o desaparecen pronto.

No deja de ser una paradoja que la participación ciudadana sea un asunto en disputa entre instituciones públicas, el instituto electoral del estado que se resiste a ceder esa atribución y la recientemente reformada secretaría de planeación y participación que busca hacer suya esta función. Incluso, desde otras instancias como el secretariado técnico de gobierno abierto también apelan a la participación ciudadana. Lo cierto es que el común

denominador de todas las instancias oficiales es su visión inducida de la participación, siempre por cauces acotados.

Jalisco ganó notoriedad internacional en la década de los ochenta por la llamada *pax* narca, que no era más que un acuerdo tácito entre los cárteles de la droga para respetar la paz en Guadalajara donde vivían muchas de las familias de los capos. Esa estabilidad duró muchos años, mientras las disputas por las plazas y los ajustes de cuenta entre las bandas criminales ocurrían en otros estados. A partir de la captura de algunos líderes de los cárteles y de la descomposición de las corporaciones policías en la década pasada la situación cambió drásticamente. La inseguridad alcanzó al estado e irrumpió en su capital, Guadalajara.

Desde el inicio de la llamada guerra con el narco en el sexenio de Calderón, la inseguridad en Jalisco fue incrementándose casi a la par que la media nacional. Guadalajara dejó de ser una ciudad segura, como Mérida, para parecerse más a Colima, asediada por el tráfico de drogas proveniente del puerto de Manzanillo. De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2018 Jalisco fue uno de los estados más violentos e inseguros del país. Ocurrieron solo el año pasado 2,763 homicidios, de los cuales 32 fueron feminicidios. Más de 100 mil robos a patrimonio y otros tipos, una cifra récord. Más de 10 mil casos de violencia familiar, de los cuales más de 2 mil fueron abuso sexual. Más de 12 mil lesiones a personas. La numeralia de delitos registrada no tiene precedentes.

Frente a este escenario, las corporaciones policiacas, tanto a nivel estatal pero sobre todo al nivel estatal, están rebasadas. Por eso todas las autoridades piden en privado la presencia de más efectivos de las fuerzas federales aunque en público critiquen al gobierno federal. Prácticamente todas las autoridades han recurrido a los militares, retirados, en funciones o con licencia, para comandar las fuerzas del orden. El limitado presupuesto destinado a las policías locales sigue siendo insuficiente a pesar de que la retórica oficial es la seguridad es la máxima prioridad. Pero no solo es la insuficiencia de recursos lo que ha agravado la situación, sino la falta de una estrategia de combate al crimen organizado. En particular destaca el fracaso del mando único de la Fiscalía General que instauró la administración del ex gobernador Aristóteles Sandoval, así como el estancamiento de la Agencia Metropolitana de Seguridad que impulsó el ex alcalde de Guadalajara y actual gobernador, Enrique Alfaro.

Se podría afirmar que, en términos generales, Jalisco ha gozado de libertades políticas y civiles. En materia de derechos humanos, sin embargo, la situación ha ido empeorando, sobre todo en lo relativo a las desapariciones forzadas. Durante 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 91 recomendaciones; en el mismo periodo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió 50 recomendaciones, lo cual revela un número elevado de casos de violaciones a nivel estatal. Desde que se tiene registro de personas desaparecidas, hasta mayo de este año en Jalisco habían 7,500 personas desaparecidas, una cifra sin precedentes en el estado. Esta situación se ha visto agravada por la incapacidad del gobierno del estado de procesar las denuncias de desaparecidos que sigue aumenando. Diversos grupos de familiares de desaparecidos, al

igual que en otros estados, se han organizado para exigir respuestas a las autoridades. El punto más álgido de esta situación fue en 2018 cuando diversos colectivos en defensa de los derechos humanos tomaron la glorieta de los Niños Héroe renombrándola como la rotonda de los desaparecidos, donde a la fecha hay pancartas y plantones, algo nunca antes visto en Jalisco.

*Académico de la Universidad de Guadalajara y director de TRANSVERSAL think-tank